



## Consejo de Seguridad

Distr. general  
28 de abril de 2003  
Español  
Original: inglés

---

### **Carta de fecha 15 de abril de 2003 dirigida al Presidente del Consejo de Seguridad por el Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo**

Tengo el honor de referirme a mi carta de fecha 12 de septiembre de 2002 (S/2002/1011).

El Comité contra el Terrorismo acaba de recibir el informe complementario adjunto, presentado por Nicaragua en cumplimiento del párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) (véase el anexo).

Le agradecería que tuviera a bien hacer distribuir la presente carta y su anexo como documento del Consejo de Seguridad.

*(Firmado)* Inocencio F. **Arias**  
Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido  
en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha  
contra el terrorismo



**Anexo**

**Nota verbal de fecha 31 de marzo de 2003 dirigida al Presidente del Comité del Consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 1373 (2001) relativa a la lucha contra el terrorismo por la Misión Permanente de Nicaragua ante las Naciones Unidas**

[Original: español]

La Misión Permanente de Nicaragua ante las Naciones Unidas presenta sus atentos saludos al Presidente del Comité contra el Terrorismo en ocasión de remitir el informe complementario del Gobierno de Nicaragua conteniendo las respuestas a las observaciones y preguntas planteadas por el Comité contra el Terrorismo en referencia al primer informe presentado por Nicaragua en cumplimiento de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad (véase el apéndice adjunto).

## Apéndice

### Informe del Gobierno de Nicaragua

**Respuestas a las observaciones y preguntas del Comité contra el Terrorismo con relación al Informe de Nicaragua presentado en aplicación del párrafo 6 de la resolución 1373 (2001) del Consejo de Seguridad**

Nueva York, 31 de marzo de 2003

Apartado a) del párrafo 1:

- **¿Existen en Nicaragua redes bancarias no estructuradas? Sírvase resumir las disposiciones jurídicas que las regulan, de haberlas.**

En Nicaragua existen redes bancarias no estructuradas, se entiende por tales a empresas o entidades de carácter financiero que no están sujetas a supervisión, por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, ni por el Banco Central. Entre tales entidades se pueden identificar las siguientes:

- **Entidades micro financieras que no intermedian recursos del público.**
- **Cooperativas de ahorro y crédito.**
- **Personas o empresas dedicadas a la actividad de remesas de fondo.**

En dependencia de la naturaleza de cada una de esas entidades, el marco que las regula es el siguiente:

- **Entidades micro financieras con carácter de Sociedades Mercantiles:** se rigen por la Ley 147, “Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro” y su inscripción se hace en el Departamento de Registro y Control del Ministerio de Gobernación.
- **Cooperativas de Ahorro y Crédito:** se rigen por la ley General de Cooperativas, y su inscripción se hace en el Registro que al efecto lleva el Ministerio del Trabajo.
- **Actividad de Remesas de Fondo:** puede ser llevada a cabo por personas naturales o jurídicas, éstas últimas deben estar constituidas bajo cualquiera de las formas de Sociedades previstas en el Código de Comercio, e inscritas en el Registro Público Mercantil.

Por otro lado, indistintamente de que se trate de micro financieras o cooperativas de ahorro y crédito, toda vez que se dediquen a conceder préstamos o financiamientos, les son aplicables la Ley 175, “Ley Reguladora de Préstamos entre

Particulares” y su reforma, a través de la Ley 374, misma que regula el interés máximo que podrá aplicarse a dichos préstamos.

Estas empresas no están autorizadas para captar recursos del público en forma de depósitos, y están fuera del alcance de la Ley 314, “Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros” y de la Ley 316, “Ley de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras”.

En Nicaragua no existe el fenómeno denominado “banca paralela y clandestina”. Los bancos financieros e instituciones financieras que operan en nuestro país de conformidad con las mencionadas Leyes 314 y 316, lo hacen como entidades autorizadas para recibir fondos del público en concepto de depósito y para ello deben obtener licencia del Estado a través de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras. Existe también, la figura de “Oficina de Representación de Bancos Extranjeros”, mismos que tienen la obligación de registrarse en la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, pero que no están autorizados para captar recursos del público.

- **¿Se ha constituido ya la Comisión de Análisis Financiero prevista en el artículo 23 de la Ley de estupefacientes, sicotrópicos y otras sustancias controladas; lavado de dinero y activos provenientes de actividades ilícitas? ¿Se le han encomendado o se le encomendarán tareas que guarden relación con la prevención y la represión de la financiación de los actos de terrorismo?**

La Comisión de Análisis Financiero, establecida en el Artículo 23 de la Ley 285 “Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y Otras Sustancias Controladas, Lavado de Dinero y Activos Provenientes de Actividades Ilícitas” fue creada el 25 de febrero de 2002. Las funciones de dicha Comisión, según establece la Ley 285, están dirigidas de manera general a evitar la realización en Nicaragua de actividades ilícitas, referidas en dicha Ley.

Estas disposiciones legales contribuyen a regular la prevención y represión de la financiación de los actos terroristas. Por su parte, la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, instruyó a los bancos y financieras para el uso de la Guía para la Detección del Financiamiento del Terrorismo, propuesta por el GAFI.

En el tema de prevención de la financiación de los actos de terrorismo, la Comisión de Análisis Financiero de manera interinstitucional dio respuesta al Cuestionario de Autoevaluación de Nicaragua sobre las 8 Recomendaciones del GAFI relativas al Financiamiento del Terrorismo. Sin embargo, cabe señalar que en la Ley No. 285 no se le conceden funciones específicas en este campo. Actualmente existe un proyecto de ley que derogaría la Ley No. 285 e incorpora novedades para la Comisión.

Tenemos conocimiento de que, por razones logísticas y presupuestarias, dicha Comisión no está operando completamente en la forma prevista en la ley. Las principales tareas que ha desarrollado la Comisión han girado en torno al tema del Lavado de Dinero, en estrecha coordinación con las Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Lucha contra la Drogas, a la cual está adscrita dicha Comisión. Como ejemplo está el haber dado respuesta de manera interinstitucional a los Cuestionarios de Autoevaluación de Nicaragua sobre prevención y combate al Lavado de dinero, que incluye: 40 Recomendaciones de GAFI, 19 recomendaciones del GAFI y 25 Criterios del GAFI para determinar Países o Territorios no Cooperadores. Además, esta Superintendencia mantiene debidamente informada a la Comisión de los reportes de operaciones sospechosos o significativos recibidos de las entidades supervisadas.

- **¿Cuáles son las penas aplicables a las instituciones financieras que incumplan los artículos 32 o 33 de la Ley?**

El Reglamento de la Ley 285, en su Artículo 26, establece que las instituciones financieras que infrinjan el Artículo 32 de la misma Ley, serán multadas con el 50% del valor de la transacción financiera. En caso de incumplimiento al Artículo 33, serán multadas con el 100% del valor de la transacción realizada. Además, la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras tiene establecida una norma especial: “Norma para la Prevención del Lavado de Dinero y Otros Activos Aplicable a todas las Instituciones Financieras bajo la Supervisión de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras”.

- **¿Son aplicables los artículos 32 y 33 de la Ley a las cuentas y las transacciones financieras de todas las personas, o sólo de las que figuran en la lista que, según el párrafo 4 d) del informe, se ha distribuido a las autoridades competentes?**

Las Normas contenidas en esos Artículos se aplican de manera general a las cuentas y transacciones financieras de todas las personas sin excepción.

- **¿Cuáles son las autoridades nicaragüenses responsables de dar a conocer esa lista, y cuál es el procedimiento que se sigue para incluir o suprimir un nombre?**

Las leyes y demás normativas, no establecen expresamente cuáles son las autoridades nicaragüenses responsables de dar a conocer las listas de personas y entidades potencialmente vinculadas con el terrorismo, ni el procedimiento para incluir o suprimir nombres. Sin embargo, desde que se creó el Comité Nacional para la implementación del Plan Centroamericano de Cooperación Integral para Prevenir y Contrarrestar el Terrorismo y Actividades Conexas, ha funcionado el procedimiento siguiente:

- El Ministerio de Relaciones Exteriores ha recibido dichas listas por los canales oficiales (Embajadas u Organismos Multilaterales), y las ha remitido a las autoridades locales competentes, incluyendo a la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras;
- La Superintendencia, con base en el Artículo 3, inciso 12 y el Artículo 19, inciso 1, de la Ley 316, ha transmitido de inmediato a las instituciones supervisadas todas las listas que han sido puestas en su conocimiento, instruyendo a dichas instituciones que informen sobre cualquier operación realizada con cualquiera de las personas o entidades contenidas en dichas listas;
- En caso de darse un informe positivo – lo cual no ha ocurrido – la Superintendencia se pondría en contacto con la Fiscalía General de la República para iniciar las acciones pertinentes conforme a Ley.

**Apartado b) del párrafo 1:**

- Nicaragua ratificaría en un futuro próximo el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo. Por consiguiente, el Comité agradecería recibir un informe sobre la marcha de los trabajos en relación con cualquier propuesta de enmienda de la legislación con objeto de aplicar el Convenio, especialmente en lo que respecta a los artículos 2 y 4.

Nicaragua, ha ratificado el Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo y ha depositado el instrumento de ratificación el 4 de noviembre del 2002. La legislación interna se está revisando, e inclusive se está considerando en la Asamblea Nacional, el estudio de una Ley Modelo con relación al terrorismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores, presentado la lista de Convenios que se deben de tomar en consideración para contar con una legislación acorde con la nueva realidad frente al terrorismo.

**Apartado c) del párrafo 1:**

- Con el levantamiento del secreto bancario como resultado de las solicitudes presentadas a los tribunales competentes que se menciona en relación con el apartado c) del párrafo 1. ¿Se ha revelado la existencia en Nicaragua de fondos u otros activos financieros o recursos económicos vinculados a terroristas o a grupos terroristas? De ser así, ¿qué medidas se han adoptado, de haberse adoptado alguna?

Las autoridades competentes mantienen un control sistemático sobre los cuenta habientes y tarjeta habientes registrados oficialmente en todo el Sistema Financiero

Nacional, lo que permite mantener un exhaustivo plan de seguimiento sobre aquellas personas, tanto nacionales como extranjeras, que de una u otra forma pudiesen estar vinculadas directa o indirectamente con grupos terroristas o que forman parte de la red de lo que se conoce como el Crimen Organizado.

Es preciso señalar de manera enfática que en nuestro país no se han determinado fondos vinculados a grupos terroristas. Sin embargo, se han adoptados medidas como el mantenimiento de una estrecha coordinación con cada una de las entidades bancarias y financieras con el fin de establecer un plan de seguimiento y control sobre el uso y manejo de fondos, así como también a otras instituciones del Estado que estén vinculadas a sus operaciones por una parte y por otra, a realizar una investigación de cada una de las personas relacionadas a las cuentas bancarias.

Otra de las medidas adoptadas es mantener una estrecha comunicación e intercambio de información con la *INTERPOL* para la prevención y control de estos delitos.

- **Permiten las disposiciones jurídicas de Nicaragua la congelación de fondos, activos financieros y otros recursos como exige el apartado 1 c) de la resolución?**  
En particular, sírvase describir el procedimiento existente o propuesto para congelar fondos, activos financieros y otros recursos de las personas o entidades sospechosas de actividades de terrorismo, distinguiéndolo de la congelación de fondos, activos financieros y otros recursos de las personas sospechosas de participar en actividades de blanqueo de capitales.

Las disposiciones jurídicas nicaragüenses no permiten la congelación de fondos a activos financieros y otros recursos por simple sospecha de participar en actividades de terrorismo. Sin embargo existe un procedimiento establecido en el Código Procesal Penal.

En cuanto al procedimiento para congelar fondos de personas sospechosas de financiar actividades terroristas, una autoridad judicial puede ordenar, directamente o a través de la Superintendencia de Bancos, el congelamiento o la inmovilización de las cuentas de procesados o condenados respecto a cualquier actividad ilícita, incluyendo las relativas al terrorismo.

Los detalles sobre operaciones realizadas a través de dichas cuentas – u otras no congeladas – pueden ser conocidas por las autoridades competentes para la investigación u acusación, ya sea mediante un simple requerimiento del Fiscal General de la República al Superintendente de Bancos, o bien una vez que la autoridad judicial ordene el correspondiente levantamiento del sigilo bancario o financiero. La facultad de las autoridades judiciales dentro de los procesos, para

ordenar el congelamiento de cuentas como medida preventiva, emana de las siguientes disposiciones:

- Artículo 167 de la Constitución Política;
- Artículo 12 de la Ley 260 “Ley Orgánica del Poder Judicial”;
- Artículo 109 de la Ley 314 “Ley General de Bancos, Instituciones Financieras no Bancarias y Grupos Financieros”;
- Artículo 167, inciso 2, letra c, d) y e) de la Ley 406 del Código Procesal Penal, que dice: “son medidas cautelares reales... c) La inmovilización de cuentas bancarias y de certificados de acciones y títulos valores; d) El embargo o secuestro preventivo; e) La intervención judicial de empresa”.

En principio, el Procedimiento Judicial para congelar fondos es el mismo, tanto para el caso de terrorismo como para el lavado de dinero. Sin embargo, este último puede también estar precedido de un **reporte de operación sospechosa** que haga un banco a la Superintendencia de Bancos, en virtud de lo ordenado por la Ley 285 y de la Norma para la Prevención del Lavado de Dinero y Otros Activos Aplicable a todas las Instituciones Financieras bajo la Supervisión de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, que contempla que los bancos y otras instituciones financieras informen sobre cualquier transacción sospechosa de estar vinculada al lavado de activos, o que se desvíen de perfil normal esperado para las correspondientes cuentas.

Dichos informes son inmediatamente remitidos por la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras a la Comisión de Análisis Financiero presidida por el Fiscal General de la República. En vinculación con las circulares en que se da a conocer las listas de personas e identidades potencialmente vinculadas al terrorismo, tales informes podrían contribuir a detectar transacciones que impliquen el desvío de fondos hacia actividades terroristas, ya sea por que el recipiente de los fondos está vinculado con personas o entidades sospechosas, o por que la investigación sub-secuente encuentra pistas en esa dirección.

#### **Apartado d) del párrafo 1:**

- **¿Cómo se cerciora el sistema de seguimiento financiero de que los fondos recibidos por asociaciones, no se desvíen de sus objetivos declarados hacia actividades de terrorismo?**

La citada “Norma para la prevención del Lavado de Dinero y de Otras Aplicables a Todas las Instituciones Financieras Bajo la Supervisión de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras” contempla que los bancos y otras instituciones financieras informan a la Superintendencia de Bancos sobre cualquier transacción sospechosa



de estar vinculadas al lavado de activos, o que se desvíen del perfil normal esperado para las correspondientes cuentas.

Dichos informes son inmediatamente remitidos por la Superintendencia a la Comisión de Análisis Financiero presidida por el Fiscal General de la República. En vinculación con las circulares en que se dan a conocer las listas para detectar transacciones que impliquen el desvío de fondos hacia actividades terroristas; ya sea porque el recipiente de los fondos está vinculado con personas o entidades sospechosas, o porque la investigación subsiguiente encuentra pistas en esa dirección.

### **Apartado a) del párrafo 2:**

- ¿Existe alguna disposición en el derecho nicaragüense por la que se prohíba la adquisición de armas de fuego sin licencia (especialmente en el momento de efectuar la compra)? De ser así, ¿cómo se hacen efectivas las disposiciones del derecho nicaragüense para evitar que los terroristas obtengan armas?

Las tiendas vendedoras de armas y municiones están reguladas por la Dirección de Seguridad Pública de la Policía Nacional, quien es la encargada de otorgar los permisos para estas tiendas, el que es personal e intransferible.

Los requisitos para la autorización son los siguientes:

- Escritura constitutiva de la empresa
- Matrícula de la Alcandía
- Licencia económica y comercial
- Listado de personas que laboran en la empresa con sus datos generales
- Inventario de material existente
- Capital social mínimo de cien córdobas
- Seguro por daños a terceros
- Inscripción en la Dirección General de Ingresos
- Número del Registro Único de Contribuyentes
- Abastecedores plenamente identificados.

Las tiendas están obligadas a llevar un libro de control interno con datos generales de los compradores y de las armas o municiones vendidas y crear un expediente con documentos del comprador que contenga sus datos generales, verificación de antecedentes, identificación, etc.

El Artículo 97 del Reglamento, establece que los negocios autorizados a vender armas de fuego y municiones deberán llevar un registro de los ingresos y egresos de éstas y deben informar a la Especialidad de Seguridad Pública del lugar

semanalmente, la identidad de los compradores, dirección, tipo y número de arma vendida. El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a la cancelación de la licencia. Esto para efectuar medidas operativas que permitan la ubicación y control de poseedores de armas. También existen medidas como la incautación y decomiso de armas portadas ilegalmente.

Sin embargo, en Nicaragua, no existe una ley específica para el control de las armas, pero si existen diferentes normativas, entre ellas:

- Ley de la Policía Nacional, conocida como Ley 228;
- Reglamento de la Ley 228;
- Normas de organización Interna de Especialidad de Seguridad Pública Nacional, de la Policía Nacional.

Es importante recalcar que se desconoce la capacidad de las Instituciones Nacionales para cumplir con estas normativas, incluyendo lo relativo a la adquisición, importación y exportación de armas.

- **¿Cuál es la legislación y la práctica de Nicaragua, inclusive en lo referente a los controles de la importación y exportación, respecto de la adquisición y posesión de armas?**

En cuanto al marco legal que sustenta los controles para la importación y exportación de armas de fuego, tenemos:

- Ley 228, “Ley de la Policía Nacional” publicada en La Gaceta 162 del 28 de agosto de 1996, Artículo 3, numeral 19 y Artículo 22.
- Ley de Portación de Armas de Fuego del 9 de febrero de 1937.
- Reglamento de la Ley de la Policía Nacional, Decreto 26 – 96, publicado en La Gaceta 32 del 14 de febrero de 1997, Capítulo IV, sección tercera, y Artículos 84 al 120.
- Normas y Procedimientos de la Especialidad de Seguridad Pública de la Policía Nacional.

Para la importación de armas de fuego, adquiridas legalmente en el extranjero, se deberá de previo solicitar a la Policía Nacional el respectivo permiso, para lo cual se cumplirán los requisitos exigidos para la tenencia o portación. Los consulados nicaragüenses tramitará el permiso una vez llenados los requisitos de transportación de conformidad con las Regulaciones Internacionales de Seguridad. El Artículo 94, del Reglamento de la Ley de la Policía Nacional establece que para el traslado de armas entre dos lugares (dentro del territorio, tránsito, importación y exportación) deberá contarse con la Guía de Circulación que ampare dicho

traslado, la que otorgará la Normas y Procedimientos de la Especialidad de Seguridad Pública del lugar.

Sustentado en este marco legal, ninguna persona podrá dedicarse a la importación y comercio de armas de fuego sin tener la licencia otorgada por la autoridad competente.

- Sírvasse resumir las medidas legislativas y prácticas para evitar que entidades o personas recluten miembros, recauden fondos o traten de obtener otras formas de apoyo para actividades de terrorismo que se pretendan llevar a cabo dentro o fuera de Nicaragua, en particular:

El cuerpo legal sobre esta materia se encuentra disperso e incompleto, carece de unidad y uniformidad. Asimismo, las normativas antes mencionadas están orientadas únicamente al control interno y en la práctica, el registro de armas de fuego es una función del área de Seguridad Pública de la Policía Nacional. En Nicaragua, no existen ni medidas legislativas ni prácticas para evitar el reclutamiento de miembros o recaudación de fondos.

- En Nicaragua o desde Nicaragua, el reclutamiento de miembros, la recaudación de fondos y la búsqueda de otras formas de apoyo para otros países;

Para el enfrentamiento de la delincuencia internacional, Nicaragua cuenta con un Plan de Lucha contra el Terrorismo, desde el año 2001, con el propósito de:

- Manejar y agilizar los mecanismos de intercambio de información concerniente a posibles actos terroristas en el nivel interno y con las instancias nacionales, regionales o multilaterales.
- Reforzar la seguridad en los puertos y aeropuertos.
- Realizar los máximos esfuerzos para el control y vigilancia de los movimientos migratorios a fin de detener cualquier movimiento de personas vinculadas al terrorismo.

Al momento, en Nicaragua no se ha determinado la existencia de grupos de personas o sociedades vinculadas a este tipo de actividades, sin embargo, se deben mencionar las medidas tendientes a controlar el tráfico de ilegales en el marco del Plan de Lucha contra el Terrorismo.

- Las actividades dolosas, tales como reclutar a personas haciéndoles creer que su reclutamiento tiene unos fines (por ejemplo, la enseñanza) distintos

de los verdaderos, y recaudar fondos por conducto de organizaciones testaférreas.

La Policía Nacional desarrolla medidas de carácter operativo a través de la Especialidad de Investigaciones Económicas que maneja un control sistemático en todo el Sistema Financiero Nacional; la oficina central nacional de *INTERPOL* que mantiene coordinación oportuna e inmediata con la Dirección General de Migración y Extranjería en el control de extranjeros que entran a nuestro país; así mismo, se emplean medidas de vigilancia y patrullaje como también trabajo de inteligencia para el enfrentamiento de posibles actividades terroristas.

En Nicaragua no existen normas jurídicas que expresamente se refieran a la prevención del reclutamiento, la recaudación de fondos, la utilización de organizaciones testaférreas y la búsqueda de apoyo para otros países, en el contexto de la actividad terrorista. No obstante, tal como se mencionó anteriormente, existe toda la voluntad de una cooperación estrecha y en lo que hace a la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras, se han dirigido circulares a las entidades bajo su supervisión de conformidad con las listas que al efecto han presentado la Embajada de los Estados Unidos y el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En lo relativo a la recaudación de fondos, es importante señalar que cuando se manifiesta en la forma de depósitos del público, los únicos autorizados para ello son los bancos y las financieras, bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras de conformidad con la Ley 314 y la Ley 316.

En octubre de 2001, Nicaragua suscribió la Convención Internacional de las Naciones Unidas de 1999 para la Eliminación del Financiamiento del Terrorismo, la cual fue ratificada por el Parlamento nicaragüense (Asamblea Nacional) a través del Decreto A.N. 3287, publicado en La Gaceta 92 del 20 de mayo de 2002. además, por Decreto 62-2002, publicado en La Gaceta 121 del 28 de junio de 2002, el Presidente de la República ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la cual fue aprobada por la Asamblea Nacional de Nicaragua a través del Decreto A.N. 3246, publicado en La Gaceta 38 del 25 de febrero de 2002.

Nicaragua es miembro del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), y en tal sentido, con sujeción a la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la Comisión de Análisis Financiero en septiembre de 2002, dio respuesta al Cuestionario de Autoevaluación sobre las 8 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera relativas al tema del Financiamiento al Terrorismo,

en la que se refleja la situación de nuestro país en este tema. Este documento ya es conocido por el Ministerio de Gobernación a través de la Secretaría el Consejo Nacional de Lucha contra las Drogas que ha trabajado estrechamente con la Comisión de Análisis Financiero.

Tenemos conocimiento de que en la Asamblea Nacional existe un proyecto de nuevo Código Penal, en el cual se podrían incluir aspectos sobre actividades terroristas y su financiamiento.

En nuestro actual Código Penal, Título XI, Capítulos I y II, Artículos 493, 499 y 500, dentro del concepto de "Delitos contra el Orden Público" se tipifica el delito de "actos terroristas". El financiamiento al terrorismo lo podríamos encontrar bajo el concepto de "**promotores**" o "**instigadores**" y también bajo el concepto de "**cooperadores indispensables**". Por otro lado, las organizaciones terroristas se encuentran bajo el concepto de "Asociación para Delinquir" establecido en el mismo Código. Además, en el Título XIII, Capítulo II del Código Penal, "Delitos que Comprometen la Paz de la República", puede destacarse el artículo 546.

#### **Apartado b) del párrafo 2:**

- Sírvase describir cómo se ha mejorado la comunicación con las fuerzas del orden de la zona de América Central, los organismos policiales nacionales e internacionales y los organismos de investigación y seguridad.

La Policía Nacional tiene un sistema de comunicación oportuno y eficaz con las demás Fuerzas del Orden y Seguridad de Centroamérica, asimismo, forma parte de la Asociación de Policías de Centroamérica, del Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica y del Sistema de Integración Centroamericano. Organismos a través de los cuales se promueve una comunidad jurídica regional que proteja, tutele y promueva los derechos humanos y garantice la seguridad jurídica.

- **¿Cuáles son las instituciones de Nicaragua encargadas de proporcionar información de alerta temprana a otros Estados?**

Las Instituciones encargadas de proporcionar información de alerta temprana a otros Estados son: El Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua.

**Apartado c) del párrafo 2:**

- Dado que el informe hace referencia expresamente al régimen jurídico aplicable a los refugiados, el Comité está interesado en saber si existen o no disposiciones en la legislación vigente por las que se deniegue el acceso a Nicaragua a las personas como las mencionadas en el apartado 2 c) que no sean solicitantes de asilo. Sírvese dar ejemplos de cualquier medida adoptada al respecto.

La Dirección de Migración y Extranjería ha señalado como necesidad prioritaria la aprobación de la Ley de Migración y Extranjería que regule aspectos como el planteado. De igual manera, la función del control de extranjeros, tanto de residentes como de visitantes adquiere especial relevancia en el contexto del Plan de Lucha contra el Terrorismo, el cual no ha sido posible poner en marcha por limitaciones económicas.

**Apartado d) del párrafo 2:**

- **¿Cuáles de las infracciones a que se hace referencia en las convenciones y los protocolos internacionales pertinentes relativos al terrorismo, han pasado a estar sancionadas en el derecho interno de Nicaragua?**

Nicaragua ratificó el 18 de junio de 2002, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y fue publicada en La Gaceta Diario Oficial, el 28 de junio del mismo año. Sin embargo, estas disposiciones no han sido sancionadas en el Derecho Interno de Nicaragua.

**Apartado e) del párrafo 2:**

- **¿Estudia Nicaragua la posibilidad de modificar su pena máxima de dos años de prisión para las personas culpables de actos de terrorismo en cumplimiento de este apartado de la resolución, en que se exige que el castigo que se imponga corresponda a la gravedad de esos actos, especialmente considerando que el blanqueo de capitales está sancionado con una pena de hasta 20 años de prisión?**

En el Proyecto del Código penal de Nicaragua se contempla modificar la pena máxima de dos años de prisión a veinte años de prisión.

- Según el artículo 500 del Código Penal, los promotores e instigadores de delitos de terrorismo son considerados culpables si no puede descubrirse al autor de esos delitos. ¿Es sancionable la promoción e instigación de delitos de terrorismo con independencia de si se descubre o no al autor? En caso negativo, sírvase explicar cómo va a asegurarse Nicaragua de que toda persona que participe en la

financiación, planificación o preparación de actos de terrorismo o que preste apoyo a esos actos sea sometida a la justicia.

En Nicaragua sí es sancionable la promoción e instigación de delitos de terrorismo, la legislación penal es amplia y sanciona tanto a autores como a partícipes de estos delitos y expresamente señala: “si no se pudiere averiguar quienes cometieron el delito serán responsables los promotores o instigadores”.

- Sírvase presentar al Comité un informe sobre el estado de las enmiendas pertinentes del Código Penal de Nicaragua y del nuevo proyecto de Código Penal.

El Proyecto del Código Penal amplía los actos terroristas dirigidos contra:

- a) La vida, integridad, salud o libertad del Presidente o Vicepresidente de la República.
- b) Los diputados de la Asamblea Nacional, los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los Magistrados del Consejo Supremo Electoral.
- c) Los ataques armados a las instalaciones físicas de la Policía Nacional o del Ejército de Nicaragua.

Penaliza la conspiración con una pena de 3 a 5 años de prisión. Además, cambia la pena de los que cometan el delito de Terrorismo como pena de prisión de 10 a 20 años. También contempla la excepción de penas a aquellos que oportunamente informaren a la autoridad o impidieren la realización del plan o del acto terrorista.

- Sírvase indicar la competencia de los tribunales de Nicaragua para entender en los actos delictivos de cada uno de los tipos siguientes:
  - Actos cometidos en Nicaragua por cualquier persona (esté o no presente en Nicaragua en el momento en cuestión);

A partir de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal (24 de diciembre de 2002) los tribunales de justicia sólo podrán conocer de los actos cometidos por la persona que esté presente en el país, no existe un procedimiento para las personas ausentes, lo único que existe es el estado de rebeldía que es decretado por el Juez competente cuando el imputado o acusado sin justa causa no comparezca a la citación formulada por los jueces o tribunales; se fugue del establecimiento o lugar en que se halle detenido, o se ausente del lugar asignado para su residencia. Esta declaración de rebeldía no suspende el proceso pero impide la celebración del juicio.

- Actos cometidos fuera de Nicaragua por una persona que sea ciudadano o residente habitual de Nicaragua (esté o no presente en Nicaragua en el momento en cuestión);

Los Tribunales de Justicia nicaragüenses están facultados para conocer de un acto cometido fuera del país por un ciudadano nicaragüense siempre y cuando este acto esté tipificado también como delito en nuestra legislación y que esté presente en el país.

- Actos cometidos fuera de Nicaragua por un ciudadano extranjero que se encuentre en Nicaragua en el momento en cuestión.

Los Tribunales Nacionales no tienen competencia para juzgar a un extranjero por un acto que se cometió en el extranjero, únicamente puede tramitarse la extradición a solicitud del Estado que lo reclame, de acuerdo a los tratados o convenios de extradición.

#### **Apartado f) del párrafo 2:**

- **¿Cuál es el plazo legal para atender una solicitud de asistencia judicial en investigaciones o procedimientos penales, en particular los que tengan que ver con la financiación de actos de terrorismo o el apoyo a esos actos? ¿Cuánto tiempo lleva en la práctica atender a ese tipo de solicitud en Nicaragua?**

No existe un plazo legal para atender una solicitud de asistencia judicial. Nuestra legislación contempla que si lo que se pide en Auxilio Judicial Internacional es la evacuación o recepción de algún medio probatorio, no hay que conferir ningún tipo de audiencia ni evacuar trámite previo alguno, sino que de plano la Corte Suprema de Justicia ordena su recepción o cumplimiento librando despacho carta orden al Juez de Distrito competente, quien deberá actuar atendiendo lo pedido, pero cumpliendo a cabalidad con las normas procesales de Nicaragua, cualquiera que sea el medio de prueba y cualquiera que sea el origen de la petición.

- **¿Supone la existencia de acuerdos bilaterales o multilaterales una condición previa para que Nicaragua ofrezca asistencia jurídica a otros países como se pide en este apartado?**

No es necesario ya que en virtud de lo establecido en nuestra legislación, la existencia de acuerdos bilaterales o multilaterales no es una condición previa para que Nicaragua ofrezca asistencia jurídica a otros países si así lo requieren. Sin embargo, en caso de existir acuerdos o tratados bilaterales o multilaterales con el Estado requirente, estos deben aplicarse con preferencia.



**Apartado g) del párrafo 2:**

- Sírvase describir con mayor detalle las medidas adoptadas en los puestos fronterizos que se mencionan en el párrafo 2 g) 2 del informe.

En relación con las medidas adoptadas por nuestra institución tanto en las oficinas centrales como en los puestos fronterizos, podemos señalar:

- Cambio de formato de la Cédula de Residencia para Extranjeros, con mayores y mejores medidas de seguridad. Nueva libreta de pasaportes con más de 40 medidas de seguridad.
- Intercambio de información sobre modelos de documentos de viaje con los países miembros de la Comisión Centroamericana de Directores de Migración (OCAM) conformada por Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, así como en la Conferencia Regional sobre Migración de la que son miembros 11 países a saber: Belice, Canadá, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, en la que han adoptados acciones particulares para el intercambio fluido de información a través de mecanismos como la Secretaría Virtual de esta Conferencia.
- Operativo conjuntos con funcionarios del INS de los Estados Unidos de América, Policía Nacional y Migración.
- Verificación permanente del cumplimiento y seguridad en los requisitos y documentos de viaje, en las zonas estériles de los puestos fronterizos y antes del abordaje de pasajeros en naves aéreas, marítimas y terrestres.
- Coordinación para la homologación con irrestricto respeto a la soberanía de cada país de las nacionalidades con restricción para ingresar a la región centroamericana, tratando que se incluyan procedimientos y requisitos comunes.
- Se coordinó en el contexto de la Conferencia Regional sobre Migración la capacitación “in situ” de funcionarios de migración, policía y aduana ubicados en los puestos fronterizos terrestres con la participación de personal del país vecino, así como verificaciones del nivel de asimilación alcanzado.
- Definición de las necesidades de capacitación sobre documentación fraudulenta, técnicas de entrevista, despacho migratorio con el apoyo de funcionarios del INS de Estados Unidos, Canadá y México.

**Apartado c) del párrafo 3:**

- **¿Ha suscrito Nicaragua acuerdos bilaterales para prevenir y reprimir los ataques terroristas y adoptar medidas contra quienes cometan actos de esa índole?**

Nicaragua suscribió con El Salvador el Acuerdo de Cooperación para combatir el terrorismo, la narcoactividad y actividades conexas.

Fue aprobado por Decreto Legislativo de la Asamblea Nacional de Nicaragua No. 3289 y publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 92 del 21 de mayo de 2002.

- **¿Con qué países además de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, ha suscrito Nicaragua tratados en materia de extradición y asistencia jurídica mutua?**

- 1.- Tratado de Extradición de Criminales entre Nicaragua y Bélgica, suscrito en Guatemala, el 5 de noviembre de 1904.
- 2.- Tratado de Extradición de Criminales entre Nicaragua y los Estados Unidos de América, suscrito en Washington, D.C., el 1º de marzo de 1905.
- 3.- Tratado de Extradición de Criminales entre Nicaragua y el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, suscrito en Managua, el 9 de abril de 1905 (en vigor desde el 13 de febrero de 1906).
- 4.- Convención sobre Extradición de Criminales, suscrita en Washington, D.C. el 20 de diciembre de 1907 (derogada por el Artículo 19 de la Convención de Washington sobre Extradición de 1923).
- 5.- Convención sobre Extradición, suscrita en Washington, D.C. el 7 de febrero de 1923.
- 6.- Código de Derecho Internacional Privado (Código de Bustamante, contiene un Título sobre extradición), hecho en La Habana, Cuba el 20 de febrero de 1928 (en vigor para Nicaragua desde el 28 de febrero de 1930).
- 7.- Tratado de Extradición entre Nicaragua y Colombia, suscrito en Managua, Nicaragua el 25 de marzo de 1929.
- 8.- Convención Interamericana sobre Extradición, hecha en Montevideo, Uruguay el 26 de diciembre de 1933 (Nicaragua la ratificó el 24 de mayo de 1937).

- 9.- Convención Centroamericana sobre Extradición, suscrita en Guatemala el 12 de abril de 1934 (ratificada por Nicaragua en 1935).
- 10.- Convención Interamericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias, hecho en Panamá el día 30 de enero de 1975 (Nicaragua la firmó en esa misma fecha pero no la ha ratificado).
- 11.- Convenio de Extradición de Criminales entre Nicaragua y el Commonwealth de las Bahamas (por intercambio de notas del 17 de marzo y del 16 de mayo de 1978).
- 12.- Convención Interamericana sobre Extradición, hecha en Caracas, Venezuela el 25 de febrero de 1981 (Nicaragua solo la suscribió y no ha ratificado).
- 13.- Convención Interamericana sobre competencia en la esfera internacional para la eficacia extraterritorial de las sentencias extranjeras. La Paz, Bolivia 24 de mayo de 1984 (Nicaragua la firmó en esa fecha y no la ha ratificado).
- 14.- Convención Interamericana sobre cumplimiento de condenas penales en el extranjero, hecha en Managua, Nicaragua el 9 de julio de 1993 (Nicaragua depositó su ratificación el 9 de octubre de 2001).
- 15.- Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal. Hecho en Nassau, Commonwealth de Bahamas, el 23 de mayo de 1992 (Nicaragua la ratificó el 24 de septiembre de 2002 y depositó su ratificación el 25 de noviembre de 2002).
- 16.- Tratado de extradición y asistencia jurídica en materia penal entre Nicaragua y Chile, suscrito en Santiago el 28 de diciembre de 1993.  
  
Aprobado por Decreto A.N. 1884. Publicado en La Gaceta No. 63 del 1º de abril de 1998.  
Ratificado por Decreto 30-98. Publicado en La Gaceta No. 82 del 6 de junio de 1998.  
Instrumento de ratificación publicado en La Gaceta No. 221 del 18 de noviembre de 1999.
- 17.- Convenio entre Nicaragua y España sobre el cumplimiento de condenas penales.  
  
Aprobado por Decreto A.N. 1312. Publicado en La Gaceta No. 123 del 2 de junio de 1996.  
Ratificado por Decreto 10-96. Publicado en La Gaceta No. 140 del 26 de julio de 1996.
- 18.- Tratado de Extradición entre Nicaragua y México.  
Aprobado por Decreto A.N. 1888. Publicado en La Gaceta No. 64 del 2 de abril de 1998.

Ratificado por Decreto 29-98. Publicado en La Gaceta No. 82 del 6 de mayo de 1998.

- 19.- Tratado de Extradición entre Nicaragua y España.  
Aprobado y Ratificado por Decreto 70-2000. Publicado en La Gaceta No. 161 del 25 de agosto de 2000.
- 20.- Tratado sobre Ejecución de Condenas Penales entre Nicaragua y México.  
Aprobado y Ratificado por Decreto 83-2000. Publicado en La Gaceta No. 171 del 8 de septiembre de 2000.
- 21.- Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre Nicaragua y México.  
Aprobado y Ratificado por Decreto 12-2000. Publicado en La Gaceta No. 129 del 9 de julio de 2001.
- 22.- Acuerdo de Cooperación entre Nicaragua y El Salvador para combatir el terrorismo, la narcoactividad y actividades conexas.  
Aprobado por Decreto A.N. 3289. Publicado en La Gaceta No. 92 del 21 de mayo de 2002.

#### **Apartado d) del párrafo 3:**

- El Comité agradecería que se le presentara un informe sobre el estado de las 12 convenciones y protocolos internacionales pertinentes relativos al terrorismo, en particular:
  - Las medidas adoptadas para que Nicaragua se adhiera a los instrumentos a que no todavía no se ha adherido; y
  - Los avances logrados en la promulgación de leyes y la adopción de las demás disposiciones necesarias para aplicar los instrumentos a que Nicaragua se ha adherido.

Informe de los 12 Convenciones y Protocolos Internacionales sobre terrorismo:

- 1) Convención sobre ofensas y otros actos similares cometidos a bordo de aeronaves. Hecho en Tokio, el 14 de septiembre de 1963 (**Nicaragua es Estado Parte de este instrumento jurídico desde el 22 de noviembre de 1973**);
- 2) Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves. Hecho en La Haya, el 16 de diciembre de 1970. (**Nicaragua comunicó su ratificación el 6 de noviembre de 1973**);

- 3) Convenio para la represión de los actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil. Hecho en Montreal, el 23 de septiembre de 1971. **(Nicaragua comunicó su ratificación el 6 de noviembre de 1973);**
- 4) Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra las personas internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos. Aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1973. **(Nicaragua comunicó su ratificación el 10 de marzo de 1975);**
- 5) Convención Internacional contra la toma de rehenes. Aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979. **(Nicaragua no es Estado Parte de esta Convención).** El proceso para la adhesión a esta Convención se inició en noviembre de 2002 pero aun no se han emitido los decretos ejecutivos y legislativos correspondientes;
- 6) Convenio sobre la protección física de los materiales nucleares. Hecho en Viena, el 3 de marzo de 1980. **(Nicaragua no es Estado Parte de esta Convención).** Nicaragua se encuentra realizando consultas con las autoridades competentes como paso previo a iniciar el proceso de adhesión a este Convenio.
- 7) Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que prestan servicios a la aviación civil internacional, complementario al Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil (de Montreal, 1971). Hecho en Montreal, el 24 de febrero de 1988. **(Nicaragua se adhirió por Decreto 48-2001, publicado en Gaceta No. 81 del 2 de mayo de 2001);**
- 8) Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima. Hecho en Roma, el 10 de marzo de 1988. **(Nicaragua no es Estado Parte).** Nicaragua se encuentra realizando consultas con las autoridades competentes como paso previo a iniciar el proceso de adhesión a este Convenio;
- 9) Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental. Hecho en Roma, el 10 de marzo de 1988. **(Nicaragua no es Estado Parte).** Nicaragua se encuentra realizando consultas con las autoridades competentes como paso previo a iniciar el proceso de adhesión a este Convenio;
- 10) Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección. Hecho en Montreal, el 1º de marzo de 1991. **(Nicaragua ya emitió el Decreto Ejecutivo No. 9-98, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 25 del 6 de febrero de 1998, por medio del cual se adhiere a este Convenio).** No obstante,

aun falta la promulgación de un Decreto Legislativo que apruebe dicha adhesión y la elaboración del instrumento de adhesión);

- 11) Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con bombas. Hecho en Nueva York, el 15 de diciembre de 1997. **(Nicaragua depositó su instrumento de ratificación el 17 de enero de 2003);**
- 12) Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo. Hecho en Nueva York, el 9 de diciembre de 1999. **(Nicaragua depositó su instrumento de ratificación el 4 de noviembre de 2002).**

La República de Nicaragua considera indispensable que el combate al terrorismo se lleve a cabo por medio de la cooperación internacional. Es por ello que junto con sus vecinos centroamericanos contribuyó a la creación del **“Plan Centroamericano de Cooperación Integral para prevenir y contrarrestar el terrorismo y actividades conexas.”**

En este contexto, creó por medio de Decreto Ejecutivo No. 108-2001 del 26 de noviembre de 2001 el Comité Nacional para la implementación del “Plan Centroamericano de Cooperación Integral para prevenir y contrarrestar el terrorismo y actividades conexas.” Este Comité tiene por objeto asesorar y apoyar al Gobierno en todo lo relacionado a la lucha contra el terrorismo, adopción de medidas nacionales y regionales, incorporación de instrumentos internacionales de la materia a la legislación interna y la divulgación de sus normas.

El Comité Nacional está presidido por el Ministerio de Relaciones Exteriores e integrado por los Ministerios de Defensa, Gobernación, Transporte e Infraestructura, Salud, la Procuraduría General de Justicia, el Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional y las Direcciones Generales de Migración-Extranjería y Aduanas.

De igual manera, en el plano interno diseñó el **“Plan Nacional de la República de Nicaragua contra el terrorismo y delitos conexos”**, aprobado mediante Acuerdo Presidencial No. 20-2003 del 16 de enero de 2003, publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 18 del 27 de enero de 2003. Este documento será el instrumento oficial del Gobierno de Nicaragua y será de estricto cumplimiento de todas las instituciones competentes del país.

### **Apartado e) del párrafo 3:**

**¿Se han incluido en los tratados bilaterales a que se ha adherido Nicaragua las infracciones a que se hace referencia en las convenciones y los protocolos internacionales pertinentes relativos al terrorismo como infracciones que pueden dar lugar a extradición?**

El contenido normativo y conceptual que se ha acordado en los tratados multilaterales ha servido de base para estructurar los tratados bilaterales que sobre la materia ha suscrito y se ha propuesto firmar el Gobierno de Nicaragua.

### **Apartado f) del párrafo 3:**

- **¿Cómo se aplica en Nicaragua el artículo 1 f) de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 (mencionado en el apartado c) del párrafo 2 del informe)?.**

La Constitución en su Arto. 42 con base a la Convención 1951 y Protocolo del 67, excluye claramente a los individuos mencionados en el Arto. 1 Inc. f de la Convención, estableciendo en su contenido lo siguiente:

“En Nicaragua se reconoce y garantiza el derecho al refugio y de asilo. El refugio y asilo ampara únicamente a los perseguidos por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos.

La ley determinará la condición de asilado o refugiado político de acuerdo con los convenios internacionales ratificados por Nicaragua”.

Es importante tomar en cuenta, la interpretación de esta disposición constitucional al seleccionar únicamente a las personas que realicen delitos que contravengan al Estado y a la Comunidad Internacional, limitando de manera táctica los privilegios y beneficios que se brindan al momento de adquirir el refugio.

### **Apartado g) del párrafo 3:**

- En el apartado g) del párrafo 3 de la resolución se pide a los Estados que velen porque no se reconozca la reivindicación de motivaciones políticas como causa para denegar las solicitudes de extradición de presuntos terroristas. Sírvanse aclarar cómo se propone Nicaragua atender a esa petición, habida cuenta del artículo 42 de su Constitución Política.

Si bien es cierto que el Artículo 42 de nuestra Constitución reconoce y garantiza el Derecho de Refugio y de Asilo, esta condición de asilado o refugiado ampara únicamente a los perseguidos por luchar en pro de la democracia, la paz, la justicia y los Derechos Humanos en forma cívica y que estén organizados públicamente, respetando el Ordenamiento Jurídico Legal.

Esta condición también está determinada por la Legislación Interna y por los Convenios Internacionales ratificados por Nicaragua, en virtud de lo anterior, toda persona que cometan actos de terrorismo que atentan contra la seguridad y tranquilidad pública de cualquier Estado no podrán gozar de este Derecho.

#### **Párrafo 4:**

¿Ha hecho frente Nicaragua a alguno de los problemas mencionados en el párrafo 4 de la resolución, además de ser parte en el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizo de los desechos peligrosos y su eliminación?

Nicaragua, además de ser Estado Parte de los Convenios ya citados relacionados al Terrorismo, también es Estado Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional ; de la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados.

Nicaragua En la región centroamericana participa conjuntamente con los otros países en el Plan contra el Crimen Organizado, este implementado por las Policías del Area, en su contenido encontramos diez componentes: secuestro, terrorismo, narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, entre ellos. (Anexo).

En el Tratado Marco de Seguridad Democrática de Centroamérica, en su artículo 34 dice: "Las Partes se comprometen a abstenerse de adquirir, mantener o permitir el estacionamiento o tránsito en sus territorios de armas de destrucción masiva e indiscriminada, incluyendo las armas químicas, radiológicas y bacteriológicas. Las Partes se obligan, igualmente, a no construir o permitir la edificación en sus respectivos territorios, instalaciones que sirvan para fabricar o almacenar este tipo de armas".

#### **Otros Asuntos:**

Sírvase presentar un organigrama de la estructura administrativa, como las autoridades policiales, de control de la inmigración, aduaneras, fiscales y de supervisión financiera, establecida en Nicaragua para poner en práctica las leyes, reglamentos y demás documentos que se considere que contribuyen al cumplimiento de la resolución.



Además de lo que disponen la legislación interna vigente, se ha creado el "Comité Nacional para la Implementación del "Plan Centroamericano de Cooperación Integral para Prevenir y Contrarrestar el Terrorismo y Actividades Conexas". En este se define una estructura de coordinación del Comité, compuesta por el Ministerio de Defensa, Gobernación y precedida por el Ministerio de Relaciones Exteriores. (anexo).

EL Comité espera con interés recibir una copia del Plan de la República de Nicaragua contra el Terrorismo y Delitos Conexos, una vez aprobado.

- Se anexa el Plan Nacional Contra el Terrorismo y Delitos Conexos, del 3 de Junio de 2002.

---